

LA UNIVERSIDAD DEL DESPILFARRO

Las universidades españolas han creado un entramado societario en el que se cometen excesos presupuestarios, sin atender el interés real de los estudiantes

LA calidad educativa, en general, y la universitaria, en particular, no solo depende del volumen de recursos que recibe, sino de la eficiente gestión presupuestaria que se lleve a cabo, así como de la existencia o no de una correcta configuración de incentivos para alcanzar el nivel de formación y excelencia exigidos. En España, la Universidad pública presenta graves deficiencias organizativas, contables y financieras, cuya superación resulta esencial para mejorar el funcionamiento de la educación superior. En concreto, urge reforzar el control interno de los centros e implantar un sistema de contabilidad que evalúe costes y resultados, según el informe de fiscalización de las universidades públicas divulgado ayer por el Tribunal de Cuentas, correspondiente al ejercicio 2012.

El organismo supervisor destaca la necesidad de reducir y simplificar los órganos colegiados para mejorar la toma de decisiones y agilizar la burocracia administrativa. Asimismo, aboga por cambiar el proceso de selección de personal para evitar la perjudicial y contraproducente endogamia que sufren las universidades españolas. Pero uno de los aspectos más alarmantes es el abultado número de entidades y fundaciones universita-

rias (574) que escapan al más mínimo control externo, con la consiguiente opacidad en cuanto al uso de recursos económicos y la gestión de personal. Este entramado societario es idóneo para cometer todo tipo de excesos presupuestarios y proceder a la contratación discrecional de trabajadores, sin atender el interés real de los estudiantes, con el consiguiente despilfarro de recursos públicos. De ahí la importancia de contar con mecanismos de control interno y un preciso sistema de contabilidad. Aunque el Gobierno haya introducido ciertas mejoras a este respecto, el Tribunal de Cuentas denuncia que muchas universidades todavía no han implementado estas necesarias medidas de gestión.

El informe confirma que no todo es cuestión de dinero, como claman los rectores. Ni mucho menos. De hecho, el coste de personal –más del 60 por ciento del gasto total en universidades– ha subido casi un 10 por ciento entre 2008 y 2012, tras el aumento de efectivos que se produjo en 2010, constatando así que en numerosas carreras y centros existe un exceso de profesorado con respecto al número de alumnos. Sin embargo, el sistema universitario no destaca especialmente en actividad investigadora, lo que pone de relieve la existencia de incentivos incorrectos entre los docentes. Con casi medio centenar de universidades públicas, más de 1,3 millones de alumnos y un gasto medio por estudiante superior a la media de la OCDE, la calidad educativa deja mucho que desear. España tiene que corregir estos defectos estructurales para lograr una universidad eficiente y de calidad. No es cuestión de dinero.